

Sobre la cuestión de la tierra hoy

PAOLA ANDREA
SALAZAR CARREÑO

Politóloga.
Estudiante de
Maestría en Historia
Grupo
interdisciplinario
de estudios políticos
y sociales
Universidad Nacional
de Colombia

En los últimos años se ha incrementado en Colombia el debate sobre las causas del despojo de tierra a millones de campesinos debido al conflicto armado y al nuevo modelo de desarrollo agrario que acentúa la inequidad y la injusticia social. Esto es lo que ha sido denominado el avance de una contrarreforma agraria¹ de enormes magnitudes, cuyos efectos más visibles son, de un lado, la consolidación de un modelo de reconcentración de la propiedad a través del despojo y apropiación ilegal de tierras del campesinado por parte de nuevos actores armados (grupos paramilitares, desmovilizados o “bandas emergentes”), cuyas consecuencias son una nueva reconfiguración territorial y un proceso de vaciamiento del campo producido por el éxodo de cientos de miles de familias y la disminución de por lo menos un millón de habitantes rurales, “al pasar de 10.3 a 9.3 millones en estos últimos cinco años.”²

De otro lado, se hace visible el drama del desplazamiento forzado y la agudización de la crisis humanitaria y social de miles de familias campesinas que arriban a la periferia de las

¹ Moncayo, Héctor León (2008) “La transformación indeseada” En, *La cuestión agraria hoy*. Bogotá, D.C: Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, ILSA

² Boletín informativo de la consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento. Número 76; Bogotá, 27 de Enero de 2010.



ciudades en situación de indigencia o pobreza, aunque cerca del 50% de ellas tenía ingresos superiores a la línea de pobreza antes del desplazamiento y el 23% registraba índices de indigencia. Después del desplazamiento, entre las mismas familias se ha incrementado la pobreza hasta el 95% y la indigencia al 82%; la mayoría carece de un empleo formal, sólo el 10% de los ocupados tiene ingresos equivalentes al salario mínimo legal y el 5% cuenta con una vivienda digna³.

Se calcula que al terminar el gobierno de la Seguridad Democrática el número de desplazados había ascendido a un total de 4.915.579⁴, aunque tal gobierno se precie de haber aumentado en forma considerable los recursos destinados a los programas de atención a la población desplazada, entre los que se cuentan Familias en Acción, programas de retorno y reubicación y proyectos productivos, atendiendo el mandato de la Corte Constitucional en sus sentencia T-025 de 2004⁵. El impacto y resultado de dichos programas ha sido mínimo, sobre todo de cara a la necesidad de generación de ingresos y restitución de tierras, tal y como lo ha expresado la misma Corte⁶.

³ Op, Cit. p.20.

⁴ Op, Cit. p.1.

⁵ Ver resultados, Presidencia de la República de Colombia. Informe Congreso 2010, Álvaro Uribe Vélez. Bogotá, D.C: Departamento Nacional de Planeación, pp. 27-87.

⁶ "Durante 2009 la Corte Constitucional dictó 13 Autos que han tenido un fuerte impacto en la reformulación de las políticas públicas y en el incremento de las partidas presupuestales asignadas para la atención de los desplazados." Boletín informativo de la consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento. Número 76; Bogotá, 27 de Enero de 2010, p.4.

Los Embera son un pueblo amerindio del occidente de Colombia, el oriente de Panamá, el norte de Ecuador, y el sur de Costa Rica. Son unas 60 mil personas.



Sumadas a esto, las políticas dirigidas por el gobierno hacia el campo no se han orientado a atacar el problema de las profundas desigualdades e inequidades. De hecho, el ex Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias optó por favorecer la gran propiedad; un ejemplo de ello, fue la asignación de subsidios multimillonarios a algunas familias regionales adineradas, reinas y empresarios a través del programa Agro Ingreso Seguro⁷, asegurando que los dineros entregados irrigaban automáticamente a los pequeños productores y generaban empleos⁸. Con el Ministro de Agricultura del actual gobierno, Juan Camilo Restrepo, y su asesor, Alejandro Reyes, se dilucida un cambio de acento en la política dirigida hacia el campo, aunque no de las dimensiones reformistas que muchos le han otorgado⁹.

El sustento intelectual de esta política se encuentra en buena medida en algunas de las tesis del libro de Reyes *Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia*¹⁰. Esta perspectiva asegura que el problema consiste en la apropiación ilegal y armada de predios por parte de narcotraficantes, paramilitares y testaferros, olvidando que aún antes de ello, la estructura de la propiedad se caracterizaba por una alta concentración. La propuesta concibe la necesidad de redistribuir las tierras arrebatadas por los grupos armados; un ejemplo de ello es el proyecto de ley de Restitución de Tierras, el cual no pretende afectar los derechos de propiedad ni “poner en cuestión los derechos de los agentes no vinculados con mafias”. En sentido estricto busca la legalización de propiedades consideradas espurias para estimular el mercado de tierras¹¹.

⁷ Revista Cambio, “Programa Agro Ingreso Seguro ha beneficiado a hijos de políticos y reinas de belleza”. Edición digital. Disponible en línea: http://www.cambio.com.co/paiscambio/847/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-6185730.html Consultado Agosto de 2010.

⁸ Revista Semana “Agro ingreso Seguro: ¿caja para ricos y reinas? Septiembre 29 de 2009. Edición digital. Disponible en línea: <http://www.semana.com/noticias-revista-de-radio/agro-ingreso-seguro-caja-para-ricos-reinas/129411.aspx> Consultado Agosto de 2010.

⁹ El Espectador, Sección Judicial. “Saldando las deudas del despojo”. Agosto 15 de 2010. Disponible en línea: <http://m.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-219348-saldando-deudas-del-despojo> Consultado Agosto de 2010.

¹⁰ Reyes Posada, Alejandro. *Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia*. Bogotá, Editorial Norma, 2009.

¹¹ El Espectador, Sección Judicial. “Tres mitos sobre la tierra.” Agosto 15 de 2010. Disponible en línea: <http://m.>

Al abordar el problema desde estos razonamientos, Reyes hace caso omiso de las dimensiones políticas, históricas y estructurales que explican la problemática agraria en la actualidad. El discurso y la propuesta actual no es reformista ni revolucionario; por el contrario, retoma el legado del propio Alfonso López Michelsen y su política de desarrollo rural, el cual renunció a la posibilidad de reforma agraria y más bien optó por poner a disposición de los campesinos programas de apoyo de tipo técnico y crediticio. Al día de hoy, los programas sociales se vienen basando en este enfoque; un ejemplo de ello, es el programa Banca de Oportunidades. Sin embargo, el problema principal una vez más reside en la concentración de la propiedad de la tierra en el campo, que es al mismo tiempo causa y consecuencia del conflicto armado colombiano.

En el libro “Guerreros y Campesinos”, donde académicamente se estructura este tipo de análisis, se dejan de lado cuestiones sustanciales para abordar el problema de la tierra en Colombia. En primer lugar, se asume que los campesinos “perdieron la guerra” por el avance de los grupos armados, más no que existe una ofensiva contra los campesinos y sus propiedades. Esta afirmación tiene dos consecuencias: la primera es que deja la sensación de que todas las luchas por la tierra han sido un fracaso para los actores sociales y en ninguna medida una ganancia; no ha existido ninguna conquista. La segunda afirma que las luchas por la tierra tuvieron lugar hasta 1987, año en el cual, ascendió la lucha guerrillera, la cual terminó subsumiendo las demás luchas campesinas. Esto tiene como consecuencia no sólo quitarle legitimidad sino también legalidad a los conflictos agrarios que se han presentado desde entonces, lo cual hace parte de una estrategia macabra para vincular las luchas de la tierra con las luchas guerrilleras, en la época actual de combate contra el terrorismo. El resultado

El problema de la tierra debe abordarse con miras a realizar una reforma agraria que vincule tanto la expropiación de la propiedad mafiosa como de la gran propiedad, en la cual no sólo se sitúa el latifundio ganadero improductivo sino los terrenos asignados a los negocios de biocombustibles

elespectador.com/noticias/judicial/articulo-219340-tres-mitos-sobre-tierra Consultado Agosto de 2010.



de esto ya se vislumbra en los últimos cinco años en los cuales han sido asesinadas 33 personas vinculadas a las organizaciones de víctimas y más de 300 han sido amenazadas por tener relación directa con programas de restitución o recuperación de tierras¹².

En segundo lugar, el análisis deja de lado los desplazamientos forzados y el despojo como causa del nuevo modelo de desarrollo establecido en el campo. No se tiene en cuenta que dentro de las actuales configuraciones del capitalismo y del conflicto armado se ha venido dando un proceso de compra de tierras y/o apropiación ilegal de terrenos con coacción por parte de las mal llamadas bandas emergentes, grupos paramilitares y nuevos empresarios, que han consolidado grandes extensiones de tierra en departamentos como Meta, Vichada¹³, Casanare¹⁴ y Chocó y regiones como Urabá y el Magdalena Medio dedicadas a los cultivos de palma u otros negocios de biocombustibles¹⁵. Estos negocios son una causa más de la expropiación de los campesinos al obligarlos a vender su mano de obra y sus tierras, o a abandonarlas.

En tercer lugar, el análisis supone el éxito de la Seguridad Democrática con el fortalecimiento de la capacidad de coacción del Estado, la derrota militar de las guerrillas, la desmovilización de estructuras paramilitares, el fin de la guerra y el inicio de una nueva etapa denominada posconflicto, en el cual las víctimas son efectivamente reparadas. Estas afirmaciones olvidan lo asegurado por Christophe Beney, jefe de la delegación en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a propósito de la presentación del Informe anual de esa organización, según el cual, no sólo los desplazados siguen siendo invisibles sino que las FARC se han adaptado de forma dinámica al conflicto y tienen de nuevo una capacidad para continuar siendo un actor importante del conflicto armado¹⁶.

¹² Boletín informativo de la consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento. Número 76; Bogotá, 27 de Enero de 2010, pp 3-4.

¹³ Op, Cit. p.12.

¹⁴ González, José Jairo. "Los paramilitares y el colapso estatal en Meta y Casanare" en, Romero, Mauricio (edit.) (2007) *Para- política: ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos*. Bogotá. Intermedio y Corporación Nuevo Arco Iris, pp. 309- 340.

¹⁵ Diócesis de Chocó y Human Rights Everywhere. (2004) *El Cultivo de la Palma Africana en el Chocó: legalidad ambiental, territorial y derechos humanos*. Colombia, SUIPPCOL: Programa Suizo para la promoción de la Paz en Colombia.

¹⁶ El Tiempo, "No se puede creer que las Farc tengan más capacidad ahora que hace 8 años":

La continuidad de la política de Seguridad Democrática implica la continuidad de la guerra contra el campesinado y el fortalecimiento de un modelo capitalista extractivo orientado a favorecer, legitimar y consolidar el despojo, el desarraigo, la pobreza

En suma, puede decirse que el problema de la tierra en Colombia y el conflicto agrario han sido insuficientemente abordados; se esperan cambios de acento en la política dirigida hacia el campo, pero que estos cambios no son estructurales. Sin duda, la dinámica de apropiación de tierras por grupos armados es un problema bastante importante; no obstante, deben considerarse otros factores históricos, políticos y económicos que explican la persistencia de la concentración de la propiedad, la desigualdad y la inequidad en el campo. El problema de la tierra debe abordarse con miras a realizar una reforma agraria integral que vincule tanto la expropiación de la propiedad mafiosa como de la gran propiedad, en la cual no sólo se sitúa el latifundio ganadero improductivo sino los terrenos asignados a los negocios de biocombustibles, entre otros actores beneficiarios de la gran propiedad. La continuidad de la política de Seguridad Democrática implica la continuidad de la guerra contra el campesinado y el fortalecimiento de un modelo capitalista extractivo orientado a favorecer, legitimar y consolidar el despojo, el desarraigo, la pobreza. Otra cosa es que la política para el campo y los campesinos se pretenda presentar con un discurso de *reformismo neoliberal*.



Frank Pearl". Abril 26 de 2010. Disponible en línea: http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7668088.html Consultado: Agosto de 2010.